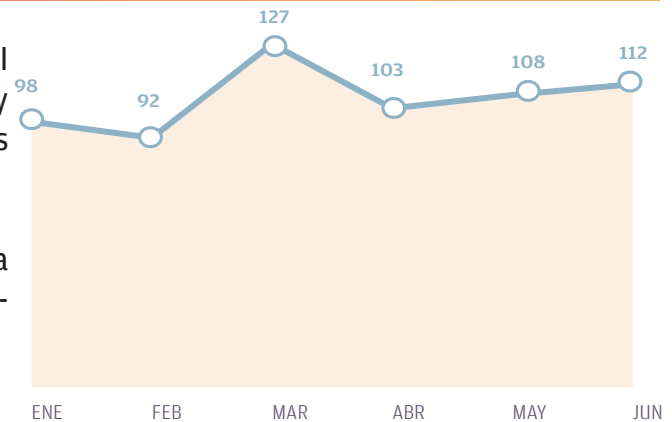
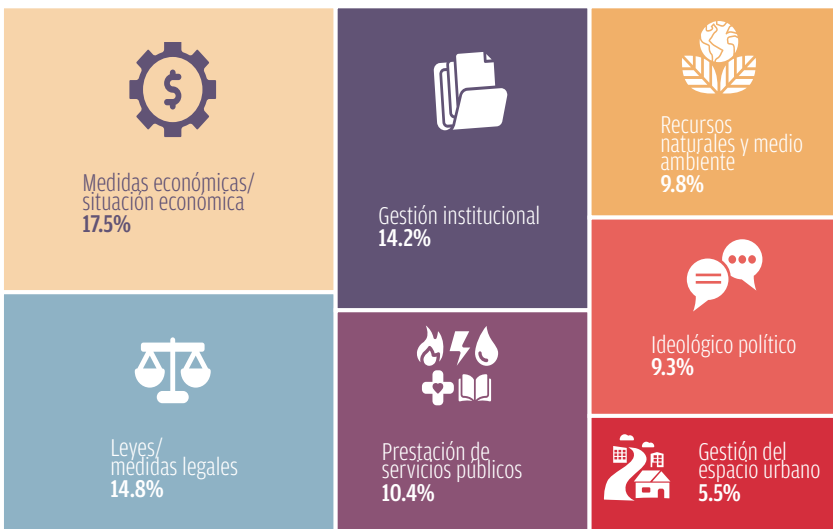


Durante el mes de junio se registraron 112 conflictos en el territorio nacional, cifra habitual para esta época del año y acorde con la cantidad de casos observada desde principios de año.

La tendencia de los dos últimos años muestra que la mayoría de los conflictos está relacionada con la gestión de la institucionalidad pública y con temas económicos. El primer tipo de conflictos es expresión de la insatisfacción



### TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

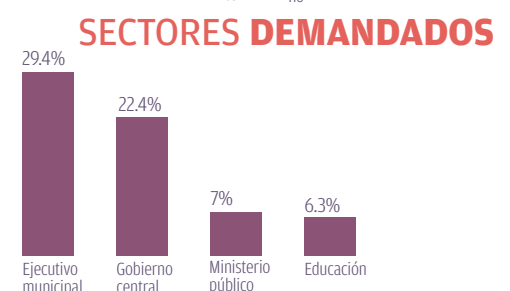
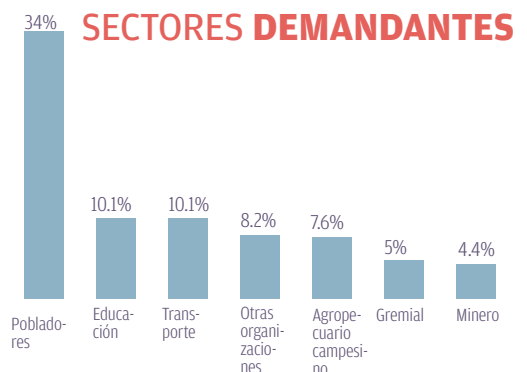


de la población con la labor de funcionarios públicos de distinto nivel, con los trámites que se ven obligados a realizar ante autoridades municipales y de otras entidades, así como con las obras públicas.

El segundo tipo de conflictos es resultado de las dificultades que la población enfrenta para generar ingresos, especialmente en el sector informal en el que se encuentra la mayoría de la PEA, y del constante encarecimiento del costo de vida. En junio se produjeron movilizaciones a raíz del incremento

de las tarifas de transporte público anunciado por los choferes, en protesta por las elevadas tarifas de energía eléctrica y de aseo público, por el acceso a puestos de venta en ferias y mercados, entre otros. Los conflictos por despidos, deudas salariales y otros problemas en el sector formal no son tan numerosos como en los años pasados. Es necesario mencionar que los conflictos por temas económicos e institucionales generan la impugnación de una diversidad de normas legales (ordenamiento vehicular, ordenamiento de ferias y mercados, a nivel municipal, Decreto Supremo 4959 que regula la importación, exportación y comercialización de mercurio, a nivel nacional) por distintos sectores que se consideran perjudicados por éstas en sus ingresos y sobre las cuales no fueron consultados. Es clara la ausencia de una noción de interés general en la población boliviana.

Durante junio los pobladores de centros urbanos fueron los principales movilizadores por una variedad de temas, sobre todo vinculados

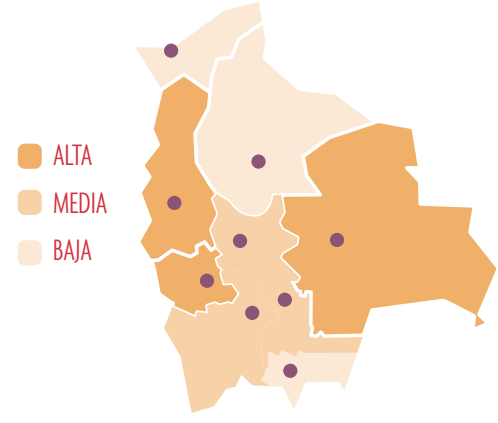


con la gestión institucional y la situación económica. El sector de educación, representado por padres de familia, protestó por los casos de abuso sexual y bullying que se registraron en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en un momento en que la sensibilidad social hacia esas formas de violencia parece ser mayor. En 2022 de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se registraron 110 casos diarios de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Si bien el Estado en sus diferentes niveles sigue siendo el principal demandado, en junio los gobiernos municipales fueron los más interpellados debido al escalamiento de las pugnas políticas y partidarias. La pugna por el control de los concejos municipales, como se observó en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, y la persecución judicial de autoridades y exautoridades, como el gobernador de Santa Cruz y la exalcaldesa de El Alto, desestabilizan aún más la ya difícil gobernabilidad subnacional y acentúan el debilitamiento de la institucionalidad democrática.

La Paz, Santa Cruz y Oruro concentraron la mayoría de las protestas del mes, este último desplazó a Cochabamba debido a la pluralidad de pequeñas protestas vinculadas principalmente a temas de gestión municipal.

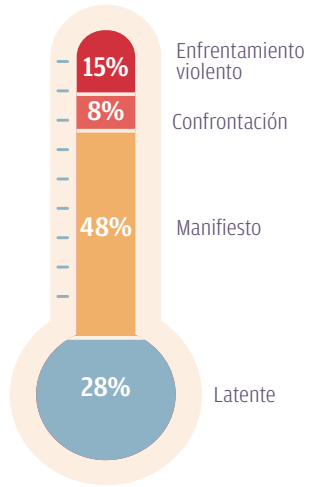
## GEOGRAFÍA DE LA CONFLICTIVIDAD



## VIOLENCIA EN LOS CONFLICTOS



## NIVEL DE CONFLICTIVIDAD



En general, en los conflictos sociales de junio se llevaron a cabo medidas de presión no violentas, como marchas, concentraciones y otras. Sin embargo hay que señalar que hubo numerosos enfrentamientos violentos con la policía o entre sectores de la sociedad civil, la mayoría de estos casos se produjeron en conflictos políticos o con trasfondo político: por el control del Concejo Municipal de Cochabamba, en el que se enfrentaron partidarios del alcalde con personas afines al MAS y se agredió a una concejala; agresión violenta a una asambleísta departamental en Santa Cruz; toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz y otros. Es preocupante que este tipo de conflictos presente un alto grado de violencia y que las acciones queden en la impunidad puesto que los agresores están protegidos por actores con poder.